



DOCUMENTO POLITICO

Miguel Urbán
Teresa Rodríguez
José María González "Kichi"
Neskutz Rodríguez
Laura Camargo
Emmanuel Rodríguez

ÍNDICE

1. Introducción
2. El contexto: ¿dónde nos movemos?
3. Las tareas de Podemos
4. Un programa de ruptura y desobediente

Introducción

Hemos dividido el texto en tres partes. La primera trata sobre el contexto a nivel global, europeo y español, aportando también un análisis que fundamenta nuestra apuesta por la conformación de un bloque social de las clases trabajadoras y populares. La segunda se centra en las tareas centrales de Podemos, fijando las líneas maestras de la acción política del periodo que viene. Por último, en la tercera parte, se aborda la cuestión del programa y la perspectiva de un gobierno desobediente y constituyente.

Por resumir en tres puntos la propuesta que desarrollaremos en el documento, Podemos en Movimiento apuesta por:

1) Un Podemos capaz de impugnar el régimen bipartidista. Antagonista, en tanto que defendemos un proyecto contrario al que han defendido los partidos del régimen, siempre al servicio de las élites económicas. Esto pasa por no mimetizarse, ni en la forma de hacer política ni en el proyecto y políticas que defendemos, con el PSOE y, por tanto, por no ser subalternizarnos. Esto, ya sea en los municipios o en las Comunidades Autónomas, y pasa por evitar acuerdos de “mínimos” que faciliten a medio plazo la vuelta a normalidad del viejo orden. Hace falta preparar una perspectiva de gobierno rupturista y constituyente, con un programa de reformas que ataquen al poder económico y político de las élites, abriendo el camino para una sociedad radicalmente democrática fundamentada en los bienes comunes.

2) Un Podemos radicalmente democrático, que tras el agotamiento y fracaso de la hipótesis de Vistalegre, se replantee su modelo de organización. A pesar de sus logros inéditos, este modelo se ha demostrado ineficaz y con consecuencias organizativas, discursivas y programáticas no siempre afortunadas. Necesitamos democratizar la organización, construir herramientas feministas dentro y fuera, garantizar el debate político en el conjunto de Podemos, vincularnos a la sociedad civil, formar parte de la removilización social, colocando en el centro la lucha de clases, construir desde lo local y tener implantación territorial. Trabajar para construir contrapoderes e instituciones alternativas a las estatales.

3) Tenemos la tarea de coordinar y tejer alianzas entre los distintos espacios políticos que han surgido antes, pero, sobre todo, al calor del 15M. Uno de los objetivos prioritarios es que en la próxima cita electoral podamos construir candidaturas que vayan más allá de una suma de siglas y de una unión por arriba, conformar un bloque social y político contra-hegemónico, a varias escalas, desde los barrios hasta el conjunto del Estado.

El contexto: ¿dónde nos movemos?

El contexto político a escala global y europea

Esta Asamblea ha de abordar numerosos debates y definir una estrategia política para un periodo a medio plazo, sin las urgencias y el vaivén de las tácticas correspondientes a un periodo trepidante.

Frente a los riesgos de un debate demasiado interno y nominal, de lo que se trata ahora es de mirar la realidad social y política, y sus fuertes cambios, para afrontar los retos decisivos que tenemos en frente. Para ello, es inevitable partir de un breve análisis del contexto general en el que ha de insertarse nuestro proyecto.

Si bien hace ya tiempo que la crisis civilizatoria y multidimensional —ecológica, energética, social, de cuidados, política, cultural y ética— era ya patente, el estallido de la burbuja financiera a partir de 2008 ha empujado esas dinámicas a niveles todavía más profundos. La crisis ha sido la consecuencia inevitable de un capitalismo financiarizado y de unas políticas neoliberales y autoritarias que, lejos de verse cuestionadas, se están recrudesciendo. Asistimos, por tanto, a una nueva vuelta de tuerca contra los derechos, libertades y bienes públicos y comunes, conquistas que fueron resultado de duras luchas de los y las de abajo a lo largo de los dos últimos siglos. El “modelo” civilizatorio dominante se presenta como el único posible y pretende aparecer como “natural” e irreversible a los ojos de las mayorías sociales, pero su continuidad está agravando todo tipo de desigualdades e injusticias, al tiempo que pone en riesgo el futuro de la vida en el planeta.

En medio de esta crisis global, la Unión Europea se nos presenta como un proyecto fallido. Aunque durante un período, la “integración europea” pareció compatible con el reconocimiento del “constitucionalismo social” que fue extendiéndose en Europa tras la derrota sufrida por el nazismo y el fascismo, la Unión ha acabado siendo diseñada como un motor de la globalización neoliberal, alejada de cualquier control democrático. Hoy las élites europeas han roto abiertamente con el “pacto social”. Buena prueba de ello es la imposición de la “regla de oro” del déficit y del pago de la deuda pública, provocada por el “rescate” al sistema financiero especulativo responsable de la crisis, blindado mediante la modificación de las Constituciones, tal y como aquí ocurrió con el artículo 135.

Durante la reciente crisis, las élites han apostado por políticas austeritarias, liberticidas y xenóforas, conduciendo a situaciones de emergencia social en muchos de los países de la propia UE, particularmente del Sur de la eurozona, tal y como prueba el caso extremo de Grecia. En este país pudimos comprobar justamente hasta donde podían llegar las élites del continente, promoviendo lo que propiamente fue un golpe de Estado financiero frente al rechazo popular (en referéndum) de las exigencias draconianas de la Troika. El actual Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker —gobernante durante largo tiempo del “paraíso fiscal” luxemburgués— lo dejó muy claro: “No puede haber elección democrática contra los tratados de la UE”. Se suma a esto la negativa a reconocer el derecho de refugio y asilo a todas aquellas personas que huyen del hambre y de

guerras, a las que la propia UE no es ajena, lo cual supone la más dramática y vergonzosa demostración de cómo está “Europa”. Las élites europeas hacen caso omiso al Derecho Internacional y pretenden convertir el continente en una “fortaleza”, cada vez más rodeada de muros y vallas, incluso dentro de sus fronteras internas.

Este diagnóstico crítico no debe conducirnos, sin embargo, a renunciar a “otra Europa posible”, pero esta deberá surgir del protagonismo de las clases subalternas y de los pueblos que conforman, de la ruptura con las políticas austeritarias y la deudocracia, de la solidaridad y la hospitalidad hacia todas las personas que aspiran a ser reconocidas como seres humanos con derecho a una vida digna.

Estamos entrando, además, en una nueva etapa a escala internacional. Nos encontramos en un contexto en el que el sueño de la “globalización feliz”, si algún día existió, pertenece al pasado y solo cabe ampliar los beneficios privados deteriorando las condiciones de vida y de trabajo en cada vez mayores proporciones de las clases populares e intensificando aún más la depredación de la naturaleza mediante un “modelo” de producción, distribución y consumo que no hace más que agravar el cambio climático. La victoria de Trump en los EEUU, o el Brexit en Reino Unido señalan una tendencia a una parcial desglobalización y regionalización mediante un auge del proteccionismo, del productivismo fosilista y del populismo autoritario, patriarcal, xenófobo y racista.

En ese marco de crisis de legitimidad de las élites, del establishment y de los principales partidos del sistema, las tendencias al ascenso de la extrema derecha en Europa no dejan de reforzarse, con gobiernos ultraconservadores y nacionalistas en el Este (Hungría, Polonia...), el auge del Frente National en Francia y de diversas fuerzas reaccionarias islamofóbicas en países centroeuropeos. Se trata de proyectos que siembran divisiones internas en las clases populares y buscan enemigos en su seno mediante discursos xenófobos. A la vez, pretenden recuperar una “soberanía nacional” que, sin embargo, no va acompañada de un cuestionamiento de las políticas contra el mundo del trabajo.

Paralelamente, en la Unión Europea se debaten reformas que, aún sin consenso entre las élites de los principales Estados miembros, podrían reforzar ciertas fórmulas de recentralización de competencias dominadas por países del Centro y del Norte de Europa -si Alemania lo permite-, como podría ser la formación de un Fondo Monetario Europeo. Al mismo tiempo, se fortalece mediante la arquitectura del Sistema Euro, las políticas económicas, la regulación flexible de los mercados y las estrategias oligopólicas de las grandes corporaciones, una disciplina fiscal y subalternidad productiva y comercial en las periferias. Unas periferias europeas (Este y Mediterránea) que se han ido subordinando por la dualidad que genera el Sistema Euro entre países superavitarios y deficitarios y la jerarquía plasmada en la cadena de valor europea, en la que los sectores estratégicos los acaparan los países centrales. Asimismo, el aumento de los flujos de movilidad forzada desde países, la guerra multipolar en Oriente Próximo o la política de rearme militar o de fortalecimiento de la seguridad interna en una Europa aislada en proceso de desgajarse cierran el círculo del aus-

teritarismo con la tendencia creciente a la restricción de libertades y derechos fundamentales.

Dentro de esa agravación de las tensiones dentro de la UE y especialmente en la eurozona, las fuerzas del cambio atraviesan avances desiguales, contradictorios y difíciles y siguen actuando en un marco nacional-estatal. Así, mientras la Unión Europea, la misma Alemania y sobre todo las empresas-red transnacionales (dominadas por potentes empresas matriz que subordinan a una red amplísima de filiales, empresas auxiliares y franquicias) intervienen más allá de las fronteras a lo largo y ancho de espacios institucionales y mercados supranacionales, las fuerzas que están emergiendo frente a la deudocracia, salvo en el caso del incipiente movimiento contra los megatratados comerciales, no logran articularse a escala europea.

Este proceso de configuración de nuevas fuerzas políticas adopta formas diversas, con desigual influencia en las clases populares y diferentes resultados. Desde la formación de gobiernos con proyectos fútiles para enfrentar a los halcones de la Troika en Grecia, el apoyo crítico de fuerzas de izquierda a un gobierno del PSP en Portugal, la recuperación de proyectos que reivindican la idea de socialismo en EEUU y Reino Unido (Sanders, Corbyn), o propuestas nacional-populares como en Francia con Melenchon, pasando por populismos tecnocráticos, como en Italia, o experiencias como Podemos en Estado español. Un panorama que, sin duda, está lejos todavía de una mayor clarificación en sus proyectos y propuestas políticas, así como de una coordinación efectiva a escala europea, de todas aquellas fuerzas dispuestas a extraer las lecciones de la derrota sufrida por el pueblo griego para evitar su repetición en esta nueva etapa.

El Estado español

La situación en el Estado español, en el contexto de extensión de proyectos reaccionarios en Europa, representa una excepción, en tanto que las fuerzas políticas del cambio han conseguido influir en diferentes niveles de los poderes públicos. Las clases populares han respondido a las políticas de austeridad y recorte de derechos abrazando a fuerzas políticas que se han opuesto a dichas medidas, que fueron generalizadas de manera radical desde 2010 en gran parte de Europa.

La irrupción del 15M en 2011 fue un acontecimiento que marcó un antes y un después en nuestra historia contemporánea y que sirve de base para pensar un horizonte diferente. Con mensajes como “no somos mercancía en manos de políticos y banqueros”, “No nos representan”, “Lo llaman democracia y no lo es”, el movimiento fue poniendo al desnudo la crisis de régimen larvada tras el estallido de la burbuja financiero-inmobiliaria, el giro austeritario del gobierno de Rodríguez Zapatero en mayo de 2010 y la inagotable lista de escándalos e imputaciones por corrupción que se han ido sucediendo desde entonces, afectando a diferentes instituciones del Estado, incluida la monarquía. El ciclo de movilizaciones y protestas que desde entonces se desencadenó creó un clima de indignación colectiva y un proceso de repolitización de los y las de abajo que permitieron la apertura de una ventana de oportunidad a través de la cual se podía intuir una ruptura democrática. Paralelamente, el ascenso de un movimiento soberanista en Catalunya ha ido abriendo una grieta en el

“modelo” de organización territorial del Estado con la reivindicación del derecho a decidir su futuro.

Con todo, después de las elecciones del pasado 26J el régimen del 78 en el Estado español ha demostrado capacidad de resistencia (PP) y se apoya en un nuevo partido (Cs) cuyo espacio electoral se ve, sin embargo, limitado, dada la rápida frustración de las promesas “regeneracionistas” de las que era portador. Aunque herido en su flanco izquierdo (PSOE), el régimen ha formado un gobierno para aplicar los grandes consensos de los partidos políticos al servicio de las élites financieras. Oligarquías a su vez altamente dependientes del marco de evolución de los mercados europeos, del abaratamiento del coste de la financiación y la liquidez que facilita el Banco Central Europeo (BCE) con sus programas de flexibilidad cuantitativa y compra de activos, y de que Bruselas legitime una política de ajuste en nuestro país, base para poder restaurar las tasas de ganancia de las grandes empresas que operan en el Estado español. Los recortes que el gobierno aplicará, en torno a 7.500 millones de euros, resultan una bendición para los negocios financieros, porque se aplicarán contra servicios públicos, inversiones, derechos sociales y salarios, precisamente las medidas necesarias para ensanchar las oportunidades de negocio del sector privado y sus condiciones de rentabilidad. La cuestión de la deuda y los déficits, como bien sabemos, no representa más que un pretexto para aplicar estas políticas, porque ya hemos visto que ni buscan reducir esa carga financiera, soportada por los contribuyentes y los receptores de servicios y derechos públicos, ni tampoco son eficaces para dicho objetivo.

Desde el 15M, una parte de las clases populares empezó a organizar alternativas sociales que, finalmente, dieron pie a un espacio político que ocuparon diferentes fuerzas del cambio, especialmente con el vector abierto por Podemos. Se originó una especie de “sistema solar” de fuerzas del cambio dinamizadas por la irrupción de Podemos. El formato específico que adoptó la dirección de la principal fuerza política, una maquinaria de guerra electoral impulsada por una estrategia comunicativa muy trabajada y un aparato centralizador que pudo aglutinar, bajo su mando y desde arriba, a fuerzas políticas alternativas, condujeron a un ascenso en las elecciones a diferentes niveles. Se ha dado la cara y puesto en jaque a las fuerzas tradicionales que se han visto desprovistas de las ventajas del bipartidismo. Pero también se autonomizó de los movimientos, e inmediatamente abandonó el proyecto de autoorganización popular que pudieron representar los Círculos, decepcionando a la fracción más militante, y generando un efecto político doble. En primer lugar, una generalización de fórmulas políticas de “representación”, que no de participación, estableciendo una relación entre votantes e inscritos con el aparato de Podemos, fundada en el plebiscito sin el debate de sus términos entre las bases. En segundo lugar, la conformación de un conjunto de fuerzas del cambio, si se prefiere de “nuevos y viejos planetas”, con cada vez más peso dentro del sistema solar de las fuerzas del cambio. Así, se alcanzó, más por cálculo que por convencimiento, una coalición electoral en Unidos Podemos con IU y Equo; se va a formar un nuevo partido catalán, cuya denominación está en discusión pero promovido por En Comú, de carácter autónomo; En Marea, en Galicia, que incluye a Podemos, sin ser su vector principal; y en Andalucía, la Marea Andaluza, que muestra una tendencia política confederalizante dentro de Podemos. Asimismo, Podemos ha tenido que contar con la presencia de otras fuerzas políticas relativamente afines en el País Valen-

cià, como es el caso de Compromís.

El cierre del largo ciclo electoral español ha mostrado el alcance y las limitaciones de la estrategia electoral seguida. Se observa un tope, derivado de la reacción del electorado conservador español mediante el discurso del “miedo” frente a las nuevas fuerzas políticas del cambio, que ha permitido la recuperación parcial de terreno al PP, manteniendo la presencia minoritaria de Cs, escudero del primero, y consiguiendo la abstención sumisa de un PSOE que ha entrado en un declive difícilmente reversible. La estrategia mediática de Podemos se encuentra no solo con la barrera al miedo al cambio de parte de la sociedad española, sino también con la reacción de unos medios dominados por las oligarquías. En ese contexto, en el que se ha irrumpido en el debate público a partir de elementos del viejo sentido común, pre2007, amenazado por las políticas austeritarias, y por tanto, con debates propios de un periodo pasado y con una importante reducción de cuestionamientos y propuestas, se ha conseguido atraer la simpatía de cierto electorado indignado, pero sin invitar a debates de calado sobre los problemas reales y el futuro de nuestra sociedad que susciten un diálogo social que propicie el tránsito del viejo a un nuevo sentido común.

Podemos surgió como la herramienta política que podía trasladar al ámbito político-institucional la aspiración popular de acabar con una “casta” corrupta al servicio de la dictadura de los mercados financieros, pero tenía que hacerlo sin renunciar al “espíritu del 15M” y a la necesidad no solo de otra política, sino también de otra forma de hacerla. Desde las elecciones europeas de mayo de 2014, hasta las elecciones generales de junio de 2016, esta formación ha recorrido distintas etapas. Sin pretender una valoración global, con sus luces y sus sombras, consideramos que, aun reconociendo los inéditos logros electorales conseguidos durante apenas dos años y medio de vida, la opción aprobada en la Asamblea de Vistalegre a favor de una “máquina de guerra electoral” —con todo lo que esto ha implicado en el plano discursivo, programático y organizativo— se ha demostrado ineficaz para la consolidación de Podemos como herramienta útil para el “Cambio”.

Por eso deberíamos retomar tareas y líneas abandonadas, recuperando su vocación rupturista con el régimen, con la perspectiva estratégica de la construcción de un bloque plurinacional y contrahegemónico de los distintos pueblos que forman parte del Estado español. Para conseguirlo se hace necesario refundar también un partido radicalmente democrático, vinculado a la reconstrucción de los movimientos sociales y al empoderamiento popular, única garantía de que cualquier avance en el terreno electoral y en las instituciones puede ir acompañado de conquistas y procesos de transformación radical de la sociedad.

Esas tareas deberán desarrollarse en un momento político y social que se caracteriza por la resolución provisional de la crisis de “governabilidad” y la tendencia a la polarización de la situación entre una gran coalición de los partidos del régimen, por un lado, y el espacio Unidos Podemos, por otro, todo ello en medio de una preocupante desmovilización social de las clases populares frente a la continuidad de las políticas austeritarias y la amenaza de nuevos recortes sociales, mientras se mantiene la demanda mayoritaria en Catalunya de un referéndum que le permita decidir su futuro.

En este contexto, los grandes poderes económicos y los principales partidos del régimen se están esforzando por recuperar la iniciativa y cerrar la crisis de régimen mediante un proceso de mera “restauración”, disfrazando de “regeneración”, pero sin atreverse todavía a hacerlo mediante una reforma constitucional. De esta forma, obligan a Podemos y a las “confluencias” a tener que elegir entre participar en ese proyecto como nueva fuerza del régimen en condiciones de subalternidad o, por el contrario, continuar como fuerza de oposición al mismo, manteniendo en su horizonte la aspiración a un “Cambio” en un sentido radicalmente democrático, destituyente y constituyente. Sin negar las dificultades del momento político y conscientes de que nuestra prioridad debe ser afrontar y estimular el conflicto social y el protagonismo de las clases populares, reforzando una voluntad colectiva que apueste por transformaciones sociales profundas y duraderas. Seguimos convencidos/as de que no se ha cerrado la ventana de oportunidad abierta por el 15M y de que no podemos defraudar las esperanzas que generó nuestra formación entre los y las de abajo. Por eso, la segunda opción sigue siendo la nuestra y pondremos todo nuestro esfuerzo, leal y respetuoso con las distintas posiciones que se expresen en el debate interno, para que sea esta la que oriente nuestro próximo futuro.

El reto de construir una mayoría social con una voluntad colectiva transformadora en la formación social española

Nos movemos en un escenario de política para “millones”. Solo podremos transformar la sociedad cuando nuestro proyecto político convenza a la mayoría de la población de que el cambio es posible y deseable. Sin embargo, todo proyecto de mayorías se basa necesariamente en un bloque social que se enfrenta a otro, en organizar intereses contrapuestos y en construir un modelo de sociedad para unos o para otros. El nuestro es, por tanto, un proyecto antagonista, basado en la articulación, organización y atracción de las clases trabajadoras (aquellas personas que con su trabajo generan la riqueza colectiva, incluyendo a aquellas que no reciben un salario por ello) en alianza con las demás clases subalternas (las excluidas del poder político y empobrecidas por la conjunción del mundo de las finanzas y el Estado neoliberal), y también con los sectores discriminados y oprimidos por el orden social (mujeres, colectivos LBTBI, migrantes, etc), frente a una minoría que acumula riqueza y monopoliza el poder a costa del conjunto de la población.

En tanto periodo políticamente intenso, el ciclo que inaugura el 15M y luego se traslada a Podemos requiere de una explicación del contexto social. De hecho, si Podemos quiere seguir siendo la gran fuerza del cambio debe entender las condiciones sociales que lo alumbraron, al mismo tiempo que las tendencias a medio plazo que estas describen. En una perspectiva de ciclo largo, el 15M-Podemos no fue solo la respuesta a la crisis económica y a la degeneración del régimen político. Ambos episodios fueron también el resultado de, al menos, dos procesos complejos.

Por un lado, se reconoce el debilitamiento de la centralidad de lo que fue el gran sujeto de la política del siglo XX, y que podemos dar sucintamente el nombre de clase obrera tradicional, entendida como la clase obrera industrial fordista o de “cuello azul”. Esta se debilitó en los años ochenta, en

las llamadas luchas de la reconversión industrial, después de que en la década anterior estuviera detrás de la crisis de la dictadura franquista. Un amplio conjunto de factores explican la debilidad política de este sector de la clase obrera: la propia forma política de la Transición (diseñada para controlar y luego marginar al movimiento obrero), la degradación de las garantías y la estabilidad del empleo tras sucesivas reformas laborales, la especialización de la economía española en los sectores turístico e inmobiliario-financiero, o el papel auxiliar de la industria de automoción respecto de la industria alemana, la dinámica de externalización y subcontratación de la cadena de valor a escala global antes que nacional, etc. En esta dirección, la presencia discontinua y la falta de centralidad del conflicto sindical-laboral en este último ciclo político, justamente en una época de precarización generalizada, corresponde con el debilitamiento político del movimiento obrero en sus formas clásicas. Igualmente, la dificultad para nombrar aquello que se sitúa en la «zona social baja» (obsérvese el uso actual del concepto “popular”) manifiesta que aunque las condiciones de empleo y trabajo sean, por lo general, peores que hace treinta años, la articulación política de esas demandas aún es una construcción pendiente, y por lo tanto, una tarea que debemos asumir.

Por otro lado, debemos analizar la constitución de la sociedad española como una sociedad dominada por el fenómeno cultural de las clases medias. La clase media no es tanto un sujeto político, tampoco exactamente un estrato socioeconómico “objetivo”, cuanto una forma de pertenencia social mayoritaria basada en el rechazo-ocultamiento de fracturas sociales significativas (es decir, del rechazo-ocultamiento de la “lucha de clases”). Las clases medias españolas han sido el resultado de la evolución económica del último medio siglo: tanto de los años del desarrollismo franquista (urbanización, expansión de la educación, etc.) como de las primeras décadas de la democracia (consolidación de la peculiar forma del Estado social español, terciarización económica, financierización). Su confirmación, sin embargo, como el metal con el que se forja la sociedad española se encuentra antes en la materialidad política y cultural de la democracia que en la evolución económica reciente. La adscripción mayoritaria de la población a la clase media, y con ella a los valores de estabilidad, seguridad, progreso social y modernidad, han cimentado la relativa paz social que ha atravesado el país desde los años setenta hasta mayo de 2011.

En las últimas décadas, las contradicciones entre esta idea de una mayoría social autosatisfecha (las clases medias) y las tensiones socioeconómicas que ha atravesado esa misma sociedad han sido, no obstante, permanentes; hasta el punto de que su estallido se puede considerar el elemento fundamental de la reciente crisis política. Los elementos principales de esta relación nunca del todo satisfecha se pueden encontrar: (1) en la débil estructura salarial española que ya antes de la crisis mostraba que un 40 % de la población asalariada vivía arremolinada en torno a la franja salarial de los 600-1.100 euros, al tiempo que otro 25 % en torno a los 1.100-1.500 al mes; (2) en la estructura dual de la distribución de la educación con un 30 % de fracaso escolar, al tiempo que casi otro 30 % obtenía títulos universitarios; (3) en la incapacidad del mercado laboral de garantizar un número de empleos profesionales suficientes, tal y como se manifiesta en la enorme sobrecualificación de la población laboral del país respecto al empleo que realizan; y (4) en la propia debilidad del Estado de bienestar en Estado español, con niveles de gasto público muy inferiores a los de la Unión Europea.

Hasta 2007, estas contradicciones permanecieron sepultadas debajo de un ciclo de crecimiento de base patrimonial. Entre 1995 y 2007, el país vivió el periodo de crecimiento de mayor duración en democracia. Basado en el boom inmobiliario en el marco de un país de propietarios (en 2008 el 87 % de los hogares era propietario de al menos una vivienda). Durante este ciclo, se multiplicó por tres la riqueza patrimonial de las familias, se duplicó el consumo de las mismas en una época de prolongado estancamiento salarial y se generaron siete millones de puestos de trabajo, en su mayoría en la construcción, la hostelería-restauración y otros servicios de mercado. Sin embargo, a partir de 2007, a caballo de la crisis internacional y el propio colapso del mercado inmobiliario, las viejas tensiones explotaron una tras otra, acompañadas desde ese momento por el desempleo, los problemas asociados a los altos niveles de endeudamiento de las familias y la política de austeridad impuesta por la Unión Europea. El ciclo de movilización de los años posteriores manifestó la inviabilidad de todas y cada una de las contradicciones señaladas: los precarios servicios públicos de educación y sanidad defendidos ahora por las Mareas, el endeudamiento convertido en una gigantesca oleada de desahucios (más de medio millón), la incapacidad del mercado laboral español para absorber la fuerza de trabajo cualificada (marea granate), la precariedad económica generalizada.

No es casualidad que fueran las generaciones nacidas en las décadas de 1970 y 1980 quienes protagonizaran la oleada de protestas y proporcionaran el grueso de los cuadros de Podemos. La ruptura de la sociedad de clases medias en Estado español se ha producido en claves fundamentalmente generacionales. En términos muy resumidos, los hijos de la clase media ven cada vez menos viable la reproducción de las condiciones de vida que tuvieron sus padres.

Es desde esta perspectiva que nos planteamos los futuros retos de Podemos, y en general del actual ciclo político. La quiebra del marco cultural y político de las clases medias está detrás de la crisis del llamado régimen del '78. A partir de aquí, sin embargo, las interpretaciones son dispares. En una parte de Podemos y de los movimientos del cambio (sobre todo en las de matriz "populista", cualquiera que sea su definición), existe una lectura no del todo explícita, que señala que es posible una vuelta a las condiciones precrisis, o al menos, una recuperación del tronco social fundamental de la democracia española anclado en las clases medias. En esta línea se deben entender las apelaciones a una masa social moderada y asustadiza, dispuesta a las pequeñas reformas regeneracionistas, pero no a los cambios profundos, muchos menos a transformaciones sustanciales en la estructura social y política. Son paradigmáticos de esta línea, la búsqueda de la "mayoría social" de acuerdo con el eslogan "los que faltan"; lo que, traducido en términos sociales, implica la restauración (improbable) de la clase media como eje político del país; en términos políticos, la defensa de la meritocracia como garantía de una sociedad y un Estado "ordenados"; y en términos históricos, la reivindicación de la Transición como hecho fundamentalmente positivo.

Esta lectura descansa, no obstante, sobre una serie de presunciones difícilmente verificables. Incluso en el nivel más superficial (discursivo-electoral), el desplazamiento social de estos años ha roto con las viejas equivalencias entre categorías y adscripciones (del tipo clase media = modera-

ción). La acumulación de malestares y el incremento de los indicadores antiestablishment permiten desarrollar con éxito lecturas y discursos más arriesgados, tal y como probó el primer Podemos. De otra parte, y a un nivel que es el que debe preocupar a Podemos en el medio plazo, la tendencia parece marcar una dirección diametralmente contraria a la estabilización de una nueva mayoría social con centro en las clases medias.

La condición semiperiférica del Estado español en la cadena de producción global no apunta, en efecto, hacia la concentración en nuestro territorio de tramos de producción de alto valor añadido (I+D, industrias de alta intensidad tecnológica, etc.) que podrían generar empleos de alta cualificación y remuneración en cantidades suficientes como para sostener la ficción de la clase media (en el sentido de lo que antiguamente se llamó “aristocracia obrera”). Antes al contrario, la especialización exitosa de nuestro territorio en la captación de capitales sobre su mercado inmobiliario, con sus correlatos en el turismo y los servicios de mercado, va a seguir produciendo empleo precario, mal remunerado y con una alta rotación (con un alto desempleo estructural). Del mismo modo, la inserción europea (recuérdese en el marco de un capitalismo regional en crisis) va a continuar imponiendo, tanto a escala de Estado como en los niveles autonómico y municipal, políticas de control del gasto y de transferencia a las finanzas que conocemos con el nombre de neoliberalismo. Las políticas orientadas hacia una improbable “reindustrialización” del país y de redistribución de la renta en clave de una socialdemocracia nacional deben considerar la posición de Estado español en la división internacional y regional del trabajo y su papel exitoso como “lugar” de las grandes burbujas inmobiliarias europeas.

Traducido a términos sociales, este marco refuerza el proceso, difícilmente discutible, de erosión de las clases medias en Estado español y sobre todo de desdibujamiento de su centralidad política y cultural. Al mismo tiempo, no anuncia, per se, la constitución de una clase “precaria” suficientemente politizada y con capacidad de agencia. Los elementos de descomposición de la vieja clase obrera (fragmentación, individualización, asimilación cultural a la sociedad de clases medias) apenas están hoy en vías de ser superados y de encontrar medios de anudarse en la formación de un sujeto político alternativo. Así las cosas, la erosión social vivida de forma individualizada puede derivar en procesos rápidos de politización, tan aparentemente radicales como ambiguos, que pueden bascular sin solución de continuidad entre izquierda y derecha. La paradoja está en que el tiempo de los populismos (de derecha o de izquierda) no va a ofrecer ninguna solución consistente a las tendencias señaladas, que sería el caso de una vuelta a una soberanía nacional estatal que para Estado español resulta del todo improbable.

En esta línea de tendencia, la construcción de Podemos debe pasar por reconocer aquellos elementos no simplemente discursivos y electorales, sino que, propiamente anclados en formas de lucha, pueden llegar a construir un sujeto político consistente y alternativo. Elementos de este tipo se han expresado de múltiples formas en este ciclo, principalmente en la defensa de los derechos sociales y en prototipos de nuevas formas sindicales como la PAH, pero también formas que combinan elementos sindicales con la lucha por los derechos como las Mareas, así como múltiples

conflictos de nuevo tipo como las recientes luchas del telemarketing o posibles luchas en un sector industrial en el que siguen trabajando millones de personas. Por eso, se trata no de negar la fractura social que ha producido la crisis (función de restauración que corresponde con cualquier configuración del Estado-reforma), sino de afirmarla como espacio de conflicto real. Este debiera ser el lugar para la autoconstitución de un bloque social basado en las clases trabajadoras y subalternas: las clases medias en crisis, el nuevo precariado metropolitano y la clase obrera industrial, así como amplios sectores de trabajadores públicos que todavía gozan de ciertos derechos (cada vez más menguados) y estabilidad. Sin poner en el centro, incorporando a la dirección del proceso político en curso de forma activa, los intereses de la clase trabajadora, seremos incapaces de construir una mayoría social y de impulsar el cambio en dirección a la transformación social profunda y duradera, confrontando también en los centros de trabajo y de producción de riqueza, atacando al núcleo del poder que no se elige en las elecciones.

Por supuesto, construir esa mayoría social es un proceso complejo en el que conviven ideas, posiciones y experiencias diversas y que requiere un trabajo paciente y a largo plazo, más allá de los tiempos que impone la política electoral. No podemos pretender que esa mayoría social sea uniforme ni monocolor. No podemos pensar que todo el mundo se organizará en partidos o sindicatos, aunque la principal prioridad para la fase del ciclo que se abre es fortalecer la organización de las clases populares en la sociedad civil. Debemos también prestar especial atención a los sectores de las clases populares que no se sienten especialmente vinculados al sistema político, los “irrepresentados”. Por lo tanto, la mayoría social que aspiramos a construir tendrá dos patas: la de la organización estable y la de la ciudadanía que se adhiere al proceso de forma coyuntural, participando y apoyando el proceso de cambio de forma diversa en función del momento.

Nuestra propuesta pasa por articular esa mayoría social trabajadora sobre dos pilares. Por una parte, un proyecto de sociedad basado en la redistribución de la riqueza y en poner en manos y al servicio de la mayoría social los recursos económicos que hoy acaparan unos pocos, convirtiéndolos en “bienes comunes”. Por otro lado, la democratización de la sociedad, que pasa por subvertir la relación entre política y la gente, avanzando hacia modelos participativos y transparentes en la administración estatal, pero también en los espacios de la vida social como los centros de trabajo, que parecen completamente excluidos de cualquier mecanismo de control público.

Para seguir avanzando, organizando y ampliando la mayoría social, es necesario definir con fuerza este orden alternativo frente al desorden neoliberal. No tenemos un proyecto solo para protestar contra las élites, sino un programa capaz de facilitar el auto-gobierno de la gente y de plantar cara al poder económico y social, así como de ir más allá de la lucha electoral, poniendo en el centro la construcción de comunidad, el apoyo mutuo y la auto-organización de la gente trabajadora.

Las tareas de Podemos

Ser oposición, construir una estrategia para poder gobernar en clave transformadora

La tarea fundamental de Podemos durante este ciclo de oposición consiste básicamente en ser capaces de hacer propuestas políticas para avanzar, manteniendo la brecha abierta, evitando que el descontento sea canalizado por monstruos autoritarios, siendo el espacio de encuentro político-electoral de muchos de los que quieren cambiar las cosas, preparando las condiciones para poder ganar las próximas elecciones. Para ello, debemos redoblar esfuerzos que nos permitan estar inmersos en la vida cotidiana de la mayoría social, salir hacia fuera, participando en todos los espacios posibles, con humildad, respetando su autonomía, construyéndolos y fortaleciéndolos, estando al servicio de nuestra gente y no instrumentalizándola. Porque Podemos, aunque es un actor fundamental, no es el único. Se trata de ensanchar el espacio de experiencias sociales que generan una identidad común, crítica con el régimen y con el neoliberalismo, es decir, ganar a los “que faltan” a través del avance de experiencias sociales comunes y no de la rebaja programática o de la mimetización.

La dialéctica oposición-alternativa de gobierno es constante en casi todos los ciclos institucionales, pero seguimos en una senda de contradicciones en el seno del régimen, con tiempos acelerados, que intensifican esa dialéctica hasta el punto de identificarla. Podemos debe aparecer como la oposición al gobierno del PP, siéndolo al mismo tiempo del régimen. Para ello la solvencia de Podemos tiene que ver con su capacidad de elaborar un programa no edulcorado de gobierno, de ser capaz de ganar a sectores amplios para que ese programa pueda desplegarse en un gobierno próximo. La tarea de este ciclo es la de ser oposición para constituir desde la misma base, una alianza programática y de experiencias para un gobierno del “cambio”.

El problema del PSOE

El PSOE ha demostrado ser, una vez más, la pata izquierda del régimen. Sus vínculos con el poder económico y el establishment le impiden encabezar un gobierno al servicio de la mayoría social. La crisis de la socialdemocracia les ha transformado en una mera herramienta neoliberal y les conduce a apoyar a la derecha del PP y Ciudadanos; aunque su propia supervivencia presiona para que marque distancias puntuales y muy teatralizadas con el PP. Cada vez más en crisis, sus base social se concentra en el sur y en las llamadas clases pasivas, reflejando en su electorado un corte generacional evidente: el PSOE ha perdido la conexión con los sectores más jóvenes de la población y disputa con el PP el voto del miedo al cambio en algunas zonas rurales que no han conocido el impacto del ciclo de movilización contra la austeridad. En el sorpasso de hegemonía al PSOE en las clases populares nos jugamos la posibilidad de constituir una alternativa. Y eso el régimen también lo sabe. No se trata de mimetizarnos con el PSOE, como parecen proponer algunos y algunas compañeras de Podemos, sino de radicar el trabajo de experiencia social y política conectando emocional, política y solidariamente las viejas identidades de la izquierda con las nuevas identi-

dades surgidas de la impugnación antineoliberal y antirégimen abiertas en nuevas generaciones y sectores sociales.

Sin embargo, el PSOE está lejos de “pasokizarse” y todavía es capaz de jugar un rol de freno a las aspiraciones de cambio, como se ve en su papel en el municipalismo. Sus crisis y cierta desafección de sus bases abren la oportunidad de atraerlos hacia posiciones transformadoras, esto es, a dialogar con toda esa gente que se referencia en el “socialismo” por razones históricas o de identidad. Es fundamental que ese diálogo no se base en tratar de reproducir la socialdemocracia, sino en superarla en un horizonte de ruptura poscapitalista, dándole un cierto sentido de reconocimiento a aquellos que se sienten socialistas de corazón, a sus esperanzas en un mundo más igualitario, permitiendo hacer balances críticos de manera conjunta. Dirigirnos conscientemente a ese sector de la gente susceptible de abandonar el viejo reformismo y apostar por el poder constituyente: una tarea de largo recorrido que requerirá firmeza y capacidad de diálogo, rechazando participar en gobiernos liderados por este partido, colocándolo en el bloque del régimen, pero tendiendo la mano a sus bases sociales.

Ampliar el terreno de juego: La relación con la sociedad civil y las luchas sociales

Vivimos en una sociedad compleja, donde las personas se agrupan según sus intereses, generan comunidades de resistencia y de apoyo mutuo que constituyen frentes de lucha activos y formas de politización plurales. En esos espacios, se desarrolla una vida rica y muchas veces invisibilizada, que es fundamental a la hora de generar estructuras y formas culturales tanto para hacer posible el cambio duradero como para resistir al empeoramiento de las condiciones de vida. En esos espacios, operan multitud de organizaciones, redes, colectivos, o personas irreductibles a la forma partido o al terreno electoral que día a día aportan su granito de arena en la lucha por una sociedad más justa y democrática: en los sindicatos, en las plataformas ecologistas, urbanas o rurales, en las PAH o en los centros sociales, en las asociaciones de barrio, en los colectivos feministas, en el asociacionismo cultural, en ONG's, etc. Un ecosistema que tiene que ser el sustrato del que se alimente un partido como Podemos. Partimos del reconocimiento de que el cambio social no es posible únicamente desde la acción institucional, sino que debe ser impulsado por una pluralidad de frentes de lucha y que la cultura producida en los espacios de resistencia es necesaria para que ese cambio sea duradero, para conseguir la hegemonía de la que tanto hablamos.

Por tanto, no se trata, de absorber esa riqueza contenida en las organizaciones para supeditarla a la agenda institucional o de partido. Se trata de estar en permanente contacto con ella, de proyectar sus demandas y al tiempo, poner los recursos necesarios para apoyar estos procesos y consolidarlos. Siendo cuidadosos de sus lógicas autónomas, una de las tareas centrales de Podemos debería ser fortalecer ese ecosistema plural, acompañarlo, estar a su servicio, tejiendo alianzas que constituyen la base del cambio social.

En cuanto a las movilizaciones, la tarea es similar. Las luchas no son simples procesos de cabreo

o de protesta, son procesos de subjetivación en los cuales los de abajo se dan cuenta de su fuerza y de su potencia para transformar la realidad; en los que la gente pasa de ser algo aislado a formar parte de una colectividad. Las experiencias de lucha y de conflicto son lo que nos permitirán ampliar la base social del cambio desde un punto de vista cualitativo, es decir, fomentando que la gente común de un paso al frente y asuma responsabilidades. La tarea de Podemos es acompañar, fomentar, alimentar, articular y estar al servicio de todas las luchas sociales, prestando apoyo mediático y su capacidad de proyección pública; sus recursos económicos; poniendo sus cargos públicos al servicio de los conflictos populares, no solo a través de las redes sociales y de la prensa, sino estando en primera fila si la movilización lo requiere. Es decir, se trata de tejer alianzas también por abajo y de fomentar la maduración del “sí se puede” a través de la lucha, apoyar que los procesos de movilización puedan cuajar en organizaciones con vocación de permanencia para construir una mayoría social consciente, activa, capaz de impulsar el cambio social y político de forma profunda, es decir, de construir una sociedad diferente, radicalmente democrática, frente al modelo de las élites privilegiadas.

En el medio plazo, de lo que hablamos no es tanto de representar a las clases populares, sino de que estas se autoorganicen en base a sus demandas y aspiraciones, para construir un espacio de solidaridad material, reflexión colectiva y propuesta política. Lo que sustenta cualquier subjetividad de resistencia es el espacio de organización y de cooperación práctica, una solidaridad material, y una capacidad de generar interpretaciones alternativas, gérmenes para una nueva sociedad. A este respecto, caben varias tareas. Primero, mantener relación con aquellas organizaciones existentes, para coordinar y articular respuestas políticas, pero también, jugar el papel de facilitador para el encuentro de aquellos colectivos que no cuentan con un sujeto organizado todavía pero que se articulan sobre la base de necesidades sociales de amplia repercusión. Esta relación con los actores y sujetos sociopolíticos resulta de enorme relevancia para construir una relación orgánica entre partido y clases populares, pero también lo es, para sentar las bases de futuras instituciones decisorias legítimas, propias de un proceso constituyente o de la necesidad de construir la democracia sobre la base de la redistribución del poder.

Las elecciones y la estrategia del contrapoder: reforma o ruptura constituyente

Como se ha explicado anteriormente, la crisis de régimen no parece haber encontrado una solución clara y la situación política sigue abierta. El tradicional bipartidismo ha encontrado un arreglo precario que solo puede ser coyuntural, a expensas del propio PSOE que continúa en caída libre. Así como otros partidos que apuntalaban tradicionalmente el régimen como Convergència en Catalunya –ahora PDC– que muestran que el mapa de partidos todavía está sometido a reconfiguraciones y no se ha estabilizado totalmente. La crisis de legitimidad del sistema de representación sigue apuntalada por los nuevos casos de corrupción que continúan saliendo a la luz. Por otra parte, la recuperación económica es solo aparente y está basada en una momentánea recuperación del sector turístico-inmobiliario sobre la base de la captación de capitales internacionales. Escenario que se desarrolla con el mar de fondo de la crisis financiera internacional de la que siguen produ-

ciéndose estertores –como hemos podido comprobar en la debilidad del sector bancario italiano o del Deutsche Bank–. Por otra parte, el plegamiento de las élites políticas a los dictados de la austeridad europea hace prever nuevos recortes.

Por tanto, es de esperar en el medio plazo que las dinámicas de malestar subyacentes generen un nuevo ciclo de movilizaciones y un nuevo periodo de inestabilidad. Avisos recientes como el movimiento contra la LOMCE o los conatos de nuevo sindicalismo de inquilinos, parecen apuntar en esa dirección. El reto será, por tanto, el de tener la capacidad de ampliarlas y ayudar a que se consoliden en estructuras con vocación de permanencia, ya que estas luchas constituyen la condición de posibilidad del cambio político. En este terreno, Podemos debería jugar en el doble campo de, por un lado, llevar al terreno institucional el programa de estos movimientos, y por otro, tratar de consolidar estos movimientos en formas organizativas independientes y perdurables en el tiempo. Esto es lo que llamaríamos la verdadera substancia de un red de contrapoderes. La pregunta fundamental aquí es sobre la capacidad de estas nuevas luchas para generar su propio sentido común –de época– y cómo esto está relacionado con la posibilidad de plantear una ruptura con el régimen que permita llevar la oportunidad abierta hasta sus máximas posibilidades. Sería pues una tarea de Podemos generar cierta articulación de estas demandas a través de la aspiración a un proceso constituyente. Una aspiración que hay que volver a poner en el centro de la crisis política basándonos tanto en la pérdida de legitimidad del sistema de partidos, como de la crisis del modelo territorial salido de la Transición o de la propia institución de la monarquía.

Aunque hay un cierto ruido de fondo que indica que las élites políticas se encuentran preparando una reforma constitucional con la intención de clausurar la situación mediante un pacto que no toque lo fundamental, la cautela mostrada evidencia el miedo a abrir una situación que pueda írseles de las manos. Sin embargo, la necesidad de los partidos del régimen de recuperar su legitimidad, de reiniciar de alguna forma el sistema, les empujará de una u otra manera a empeñarse en el amago de la reforma. Podemos debe convertir los amagos de restauración que se producirán en verdaderas grietas constituyentes de la democracia por venir. A sabiendas de que la restauración no deja de ser una representación teatral –que se jugará en el terreno ético y moral de la anticorrupción–, la labor de Podemos deberá fijarse el objetivo de empujar las contradicciones del régimen hasta sus últimas consecuencias. Es decir, apuntar a que la reforma democrática es una farsa y que la democracia solamente es posible en clave de ruptura constituyente. Para ello será fundamental la articulación con las movilizaciones sociales, las únicas capaces de dar cuerpo a una proceso de este calado.

Hacia una ampliación de la Unidad Popular

Es preciso reconocer que las fuerzas del cambio son múltiples y complejas, con arraigos en la sociedad y en el territorio muy diferentes y, en gran medida, todas se necesitan entre sí, si es que persiguen modificar el estado de cosas.

Podemos contribuyó a ensanchar la audiencia de masas de todas estas fuerzas y como fuerza política tiene que establecer qué línea de alianzas y qué tipo de relaciones va a mantener con un marco de actores plural. En ese sentido, tiene además la responsabilidad principal de plantear orientaciones políticas que le trascienden, así como plantear marcos que faciliten la cooperación, el aglutinamiento y la coordinación de dichas fuerzas.

A este respecto, Podemos ha de contribuir a la conformación de una organización política que se sepa una pieza, quizá la principal, entre muchas otras, pero sin duda alguna, no la única. No puede permitirse trabajar al margen de esos muchos otros actores. Para ello, contribuir a un marco coordinado y, a ser posible, confederado, en el que las diferentes fuerzas tengan voz y peso político, parece una tarea del periodo. Para eso, en nuestra opinión, proponer una Mesa de coordinación constituyente, con el doble propósito de identificar propuestas programáticas y acciones comunes, así como de avanzar en la organicidad de dicha cooperación, habría de formar parte de dicho proyecto. En esta mesa, se encontrarían Podemos, En Comú Podem, En Marea, Marea Andaluza, Unidad Popular, las Candidaturas de Unidad Popular locales, y otras fuerzas políticas alternativas, sindicatos, movimientos sociales que lo requieran, con un peso político proporcional a sus miembros activos y fuerza electoral, con un mínimo de una persona en cada caso.

Hacia una nueva cultura política. El papel de cargos públicos y liberadas. La relación institución-calle

Las nuevas formas de representación política también tienen que ver con el papel de los cargos públicos y las personas que trabajan como liberadas para la organización. Fortalecer la democracia interna con una praxis antiburocrática y optimizar los recursos y posibilidades provenientes de las instituciones representativas son dos tareas importantes en este sentido. El cambio político y social al que aspiramos necesita también de una cultura política radicalmente nueva en cuanto a la concepción de los cargos internos y públicos; dichos cargos públicos deben estar “desacralizados”, ser uno más, estar en contacto con las bases y los movimientos y asumir que ningún proceso de transformación puede basarse solo en la acción institucional ni en la acción dentro de las cuatro paredes del partido.

Los cargos públicos de la nueva cultura política deben combatir abiertamente el “trepismo” y las fidelidades personales, estar ligados a su territorio, a los movimientos sociales y ciudadanos que haya en él y a su círculo, participando también en las estructuras de base. De esta forma puede conjurarse, en parte, el importante vaciamiento de los movimientos sociales que se ha dado desde la irrupción de Podemos y otras fuerzas del bloque del cambio en el panorama político. Los cargos son, por tanto, militantes que han asumido unas determinadas funciones de forma temporal y que no aspiran a vivir de la política; son conscientes de que el cargo no les pertenece y de que están ahí gracias al trabajo colectivo de todo Podemos y a la confianza de los votantes en el proyecto al que representan, no gracias a sus figuras individuales.

En cuanto a las personas liberadas para trabajos internos de la organización, es importante comprender que en una organización como Podemos no se puede caer en la cultura del burocratismo ni en el sometimiento a lealtades personales o de fracción: los liberados no deben ser utilizados ni dejarse utilizar como rehenes de parte en las disputas internas. Su número debe ajustarse, además, a las necesidades reales de la organización a nivel estatal así como en cada territorio para evitar su hipertrofia y que puedan convertirse en poderes internos que únicamente luchen por su sostenimiento. En este sentido, es importante calibrar bien (a día de hoy totalmente descompensados en favor de la política institucional o de aparato) los recursos económicos vinculados al trabajo interno, al institucional y a los cargos públicos para poder aportar más a la construcción de espacios y estructuras de base abiertas a los barrios y pueblos.

Las herramientas y palancas de las que disponemos para conjurar los riesgos de la profesionalización y la burocratización de los cargos son diversas: rendición periódica de cuentas, revocatorios, limitación del tiempo de permanencia en el cargo, limitación salarial, prohibición de las puertas giratorias, etc. Todo esto y, además, asumir que las nuevas formas de representación pasan por acortar la distancia existente entre representantes y representados, por mantener contacto permanente con las luchas en curso en cada territorio, por fomentar los procesos de auto-organización para esas luchas, y por demostrar que el ejercicio de la política puede ser algo perfectamente sencillo, popular y plebeyo.

Es importante para los cargos y la militancia de Podemos en general entender que la dicotomía “o la calle o la institución” puede constituir una tensión creativa; muchos de los cambios legislativos históricos que han sido relevantes para las clases populares y subalternas se han dado siempre en un proceso en el que calle e institución se retroalimentaban y necesitaban de manera clara. De hecho, la movilización popular actúa como motor de muchos de los cambios legislativos que implican avances sustantivos para la mayoría social a la vez que resulta imprescindible en momentos en los que se intenta contener, frenar o hacer retroceder el proceso de transformación social, económica y cultural.

Por último, debemos ser conscientes de que la “maquinaria de guerra electoral” que inauguramos después de la primera Asamblea de Vistalegre es performativa y genera una determinada cultura política, con sus hábitos e inercias: cargos de representación, asesores, liberaciones, tentaciones cotidianas para adaptarse al campo del poder, que necesitan contrapesos. Una organización con base en sus cargos electos y liberados se muestra insuficiente, cuando no contraproducente, para asumir el reto de transformar la realidad en un sistema en el que el poder no se encuentra únicamente en los espacios formales de representación institucional. La idea de mantener un pie en las instituciones y mil en las calles sigue siendo una brújula útil para marcar nuestro Norte.

Una militancia consciente, activa, y que mande

Es cierto que por las estructuras y actividades de Podemos han pasado decenas de miles de personas. También es cierto que solo una parte de esas decenas de miles se ha quedado a participar de forma estable y que tenemos el riesgo de tener unas estructuras de base cada vez más reducidas y una representación institucional enorme, que no se correlacionan entre ellas; una cabeza muy grande y un cuerpo muy pequeño. Esta circunstancia podría conllevar el peligro de tener unos cargos públicos que solo se deben al electorado y a sí mismos, alejándose de las luchas, de la gente común y de las formas más normales de la vida cotidiana que desarrollan en su día a día las clases populares. Se ha hablado mucho de “los que faltan” y muy a menudo los que faltan son los y las que se han ido, toda esta gente que se ilusionó antes y después de las Europeas. Por eso es fundamental que Podemos sea un espacio amable para las mujeres y los hombres que se encuentran en él y no solo para “iniciados” “liberados” “cargos” o “burócratas”.

El mejor remedio contra los peligros de la burocratización y el hiperliderazgo son unas bases fuertes, emancipadas, activas y no encerradas en la vida de partido, sino en contacto permanente con la sociedad. Es decir, no se trata de militar dentro de Podemos ni de que Podemos ocupe todos los espacios militantes y los movimientos, sino que Podemos sea un espacio a través del cual militar en la lucha por la transformación de la sociedad, entendiendo y priorizando siempre la necesaria autonomía de los movimientos, haciendo nuestras sus demandas, pero no dirigiéndolos ni fagocitándolos. Hace falta para ello una militancia volcada en ligarse a la vida cotidiana de las clases populares, en la acción social pegada al territorio, que ponga los recursos de Podemos al servicio de los espacios antagonistas de la sociedad civil, que trabaje de forma paciente y no solo a ritmo de campaña electoral. Para ello, la organización debe volcar recursos económicos y humanos en construir, dotar de medios materiales, facilitar la acción autónoma pero coordinada y dinamizar las estructuras de base.

Podemos ha sido capaz de fundar una política de lo “excepcional”, movilizándolo a millones de personas en momentos puntuales, pero se ha mostrado mucho menos capaz de proponer una política de lo “cotidiano”, de generar comunidad, solidaridades y redes de apoyo mutuo. Y es evidente que Podemos no lo va a poder hacer solo. Tenemos que ser humildes y comenzar a contar de verdad con toda esa gente que no se ha quedado a participar en el proyecto y con toda esa gente que no está en Podemos y que construye desde abajo, día a día, en sus barrios y centros de trabajo, en los centros y movimientos sociales. Toda propuesta organizativa debe estar diseñada para cumplir estos objetivos.

Iniciativas y campañas

Las campañas e iniciativas son algo fundamental para que Podemos actúe de forma efectiva. Necesitamos también innovar en los repertorios de acción, yendo más allá de las redes sociales y del formato de acto tradicional (aunque sin duda, ambos son necesarios). Es fundamental avanzar ha-

cia un modelo de campañas descentralizado y, sobre todo, que en su diseño y ejecución participen agentes que operan en la sociedad civil, que no sean campañas autoreferenciales y de partido, sino campañas ciudadanas.

Un programa de ruptura y desobediente

¿Ganar para qué?

Ningún otro ejemplo reciente temporal o geográfico es más sugerente para el diseño de una estrategia política de Podemos que el caso griego. Lo que ha sucedido en Grecia en los últimos años, desde la victoria electoral de SYRIZA hasta su capitulación frente a las instituciones europeas, supone una valiosa experiencia de la que debemos sacar lecciones y aprendizajes. En el país heleno, la materialización del ascenso al gobierno por una fuerza popular ha mostrado los límites reales respecto a lo que implica necesariamente alcanzar el poder real. Y es que, en el estrecho marco del capitalismo financiero y de la arquitectura institucional europea, el caso griego nos muestra una dura realidad: hasta qué punto es insuficiente una victoria electoral para poder emprender democráticamente una senda capaz de revertir las políticas de austeridad y avanzar hacia la transformación social y económica.

Así, “las lecciones de Grecia” nos revelan dos axiomas fundamentales para una política de cambio radical en estos tiempos. Axiomas que debemos tener presentes de forma clara a la hora de poder abordar nuestras propias hojas de ruta. De un lado, el caso griego nos ha mostrado la verdadera naturaleza de las instituciones europeas y del capitalismo financiero internacional. Esto es: su carácter antidemocrático (es decir, su oposición real y concreta a la democracia, a la voluntad popular y a los ejercicios de soberanía popular, tal y como vimos con respecto al referéndum convocado en Grecia), su necesidad de someter y aniquilar cualquier tipo de experiencia alternativa de gobierno con un programa diferente a la austeridad y, finalmente, su capacidad para chantajear a gobiernos democráticos a partir del disciplinamiento y las medidas económicas y financieras -tal y como se vio al emplear el BCE medidas unilaterales de interrupción de la liquidez para poner contra las cuerdas al gobierno-, que se requieran para doblegarlo. Por otro lado, la evolución de SYRIZA (que tantas esperanzas levantó en muchas partes de Europa) nos deja una lección fundamental para quienes apostamos por salir del laberinto de la austeridad y del “gobierno de la deuda”: una estrategia que busca la negociación y, en último término, el acomodo en los Tratados europeos es una vía que nos condenaría (también a un posible gobierno de Podemos) al sometimiento y al chantaje permanente. De esta forma, solo una estrategia desobediente frente a las instituciones de la UE “realmente existente” y de los poderes financieros puede permitirnos explorar las posibilidades reales de emprender una transición económica y energética que favorezca a la mayoría social y trabajadora. Pero esta “estrategia desobediente” no debe ser anunciada ni enunciada como un mero ejercicio de valentía particular frente a las fuerzas del orden neoliberal aquí y en Europa. Es más, en la confrontación contra las élites financieras, no se trata de retórica ni de discurso. Se trata

de articular una repuesta estratégica y programática sólida y rigurosa que marque las prioridades de un deseable futuro gobierno de Podemos. Unas prioridades que deberían pasar por algunas medidas efectivas para hacer frente a los chantajes de la Troika. En concreto, nos referimos a un gobierno que se niegue a asumir explícitamente el ajuste presupuestario impuesto por las instituciones comunitarias. Y, en segundo lugar, se compromete a desarrollar una auditoría de la deuda con participación ciudadana, al tiempo que se procede a la suspensión del pago de la misma. Del mismo modo, la perspectiva de socializar el sector bancario y energético debe situarse como un elemento básico para un programa de gobierno que, inevitablemente, va a chocar con acreedores, intereses privados y unas instituciones (UE, FMI, Banco Mundial) con las que, como nos muestra el caso griego, la estrategia de la negociación está condenada al fracaso.

Emprender esta estrategia desobediente implica, por tanto, abrir una vía que no solo busca la propia supervivencia de un proyecto alternativo a la austeridad evitando así su autoliquidación como opción transformadora. Esta estrategia nos permite también señalar el horizonte hacia el que nos dirigimos como fuerza de cambio. Un horizonte regulado por una estrategia que no solo busca ganar en el terreno electoral, sino que se plantea disputar el terreno del poder real: allí donde el poder del capital impone sus normas. Pero esta estrategia (que implica una ruptura real con las formas de gobierno neoliberales) no es posible desde el repliegue nacional ni desde meros movimientos gubernamentales, por muy audaces que éstos pudieran llegar a ser. Esta estrategia desobediente frente a los poderes financieros y las instituciones europeas requiere, como hemos venido señalando, de articular un despliegue de contrapoderes y de ir avanzando en una nueva hegemonía, además de sentidos sociales y políticos alternativos a los dominantes hasta el momento. En este sentido, las “lecciones de Grecia” también nos remiten a una necesidad cada vez más urgente: construir un movimiento europeo capaz de desafiar a las instituciones comunitarias y de emprender un proceso constituyente y refundador del proyecto europeo. Un movimiento cuya tarea básica es hacer frente a la austeridad, a la “dictadura de la deuda” y a las salidas xenófobas y reaccionarias que el proyecto neoliberal está facilitando.

Un proyecto programático para las fuerzas del Cambio

Es necesario trabajar para dar respuesta a las necesidades que la sociedad demanda, desarrollando medidas concretas, en particular aquellas que reúnan una gran legitimidad social, impugnen el modelo en vigor, sean útiles para empoderar a las clases populares y faciliten la mejora de sus condiciones de vida.

Las líneas maestras, que habría que especificar mediante la apertura de procesos colaborativos, sobre los que puede proponerse un proyecto alternativo, constituyente y antagonista, serían las siguientes:

Reformas democráticas

- Reforma del sistema democrático para desarrollar su carácter participativo y deliberativo, comenzando por un modelo proporcional de representación y dando pie a la creación de asambleas populares como espacios de debate público regular y propositivo. Conformación de mecanismos de consulta ciudadana, activados por 500.000 firmas, que habiliten procesos que desemboquen en decisiones vinculantes y reformas legislativas, entre las que podrá incluirse procesos revocatorios de consejeros autonómicos, ministros y presidentes.
- Una apuesta decidida por la “Seguridad Humana”, como aglutinador de los 58 derechos humanos, plasmados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los nueve tratados internacionales de la ONU.
- Reconocimiento y ampliación de los instrumentos de democracia directa, como son las iniciativas legislativas populares, el referéndum o las herramientas virtuales de participación.
- Control de la representación. Mandatos revocables por una mayoría social y transparencia absoluta, tanto en las actuaciones de los distintos órganos de gobierno como en las cuentas públicas. Endurecimiento de los controles y delitos relativos a la corrupción y desarrollo de órganos de control independientes con competencias sobre las diferentes instituciones públicas. Límites económicos y temporales a los cargos políticos: límites salariales, un régimen de incompatibilidad antes, durante y después del cargo y límites efectivos en la duración del mandato.
- Democratización del funcionamiento interno de los partidos. Transparencia en la financiación de los partidos, así como estricto control en las fuentes de financiación. Estos mecanismos de democratización, apertura y control ciudadano se extenderían a otras instancias de representación colectiva como las organizaciones sociales, sindicales y los medios de comunicación, en razón de las importantes funciones que cumplen en la vida pública.
- Reforma de la estructura territorial del Estado. Formulación de referéndums territoriales en las naciones históricas para determinar el tipo de relación con el Estado (Federal, Confederal, Libre Asociación, Estado Propio), garantizando un esquema de transferencias solidario entre los pueblos de la península. Defensa del derecho a decidir y de la celebración de referéndums en las naciones que componen el Estado Español, si así lo solicitan.
- Separación definitiva de la Iglesia y el Estado y ruptura del Concordato con la Santa Sede. Declaración de nulidad de las inmatriculaciones de inmuebles basadas en certificados de la propia Iglesia católica. Dejar de financiar con dinero público a los Centros de Enseñanza Concertada y a instituciones religiosas como la Iglesia.

Reformas económicas

- Reforma del sistema financiero. Aplicación de nuevas tasas a las transacciones financieras. Separación entre banca comercial y de inversión. Intervención contra el funcionamiento de la banca en la sombra, la evasión fiscal y el lavado de dinero. Promoveremos una regula-

ción que garantice la función social del crédito, acometiendo una reestructuración bancaria a cargo del accionariado y grandes acreedores, que proteja a los depositantes y garantice una gestión solvente del sector. Se incluirá la devolución de los rescates bancarios y se establecerán medidas para la formación de un polo bancario público a partir de la intervención y expropiación de la banca privada que no cumpla el nuevo marco legislativo.

- Moratoria del pago de la deuda pública, auditoría ciudadana y decisión sobre un posible aplazamiento, impago o reducción de los compromisos de deuda, protegiendo la seguridad social, los fondos de pensiones y a los pequeños ahorradores.
- Reforma fiscal progresiva sobre la base de un mayor gravamen efectivo a los beneficios corporativos –eliminando desgravaciones y deducciones–, consiguiendo que el tipo efectivo de sociedades sea del 35%, y el patrimonio, hasta un 5% a partir de 300.000 euros, y estableciendo un 0,1% anual del valor de la propiedad de la tierra. Reducción del IVA cultural y de los bienes primarios a un 6%. Aumentar la progresividad del Impuesto sobre la renta, con más tramos y un aumento del tipo marginal, eliminando algunas desgravaciones (aportaciones a las pensiones privadas, por ejemplo).
- La recuperación social de los bienes comunes así como la democratización de su gestión deberá garantizar el acceso a los mismos por parte del conjunto de la población. Los derechos sociales básicos debieran obtener un reconocimiento constitucional para que se garantice su cumplimiento y la suficiencia financiera para satisfacerlos.
- Los bienes públicos-comunes no podrán ser alienados o vendidos por las Administraciones Públicas. Su propiedad es pública-común y por lo tanto pertenece al conjunto de las personas que residen en el Estado español.
- Los bienes público-comunes serán administrados de forma democrática, siendo regulados y regidos tanto por mecanismos de participación ciudadana como por las comunidades expertas que se requieran para cada caso.
- Tendrán el estatuto de público-común todos aquellos bienes e infraestructuras de interés general necesarios para la reproducción de la vida, la participación política y el normal funcionamiento de la economía. Así, son bienes público-comunes la educación, la sanidad, la vivienda, la seguridad, los transportes, la información, la justicia así como los principales bienes naturales y espacios naturales de importancia ecológica, las vías y nodos de comunicación. Los recursos y sectores estratégicos de la economía, como las telecomunicaciones, la energía, la riqueza mineral, serán devueltos también a la condición de bienes públicos comunes. La administración de estos recursos deberá ser sometida a un fuerte control público democrático.

Reforma del Modelo Productivo: hacia la sustentabilidad ecológica

- Socialización de los sectores energéticos, de telecomunicaciones y otros sectores que suministren bienes y servicios de carácter público o comunitario. Como primer paso, estable-

cimiento de una ley de servicios de interés general y bienes comunes que obliguen a las empresas privadas a cumplir parámetros de utilidad, sostenibilidad, ecoeficiencia, inversión, innovación y redistribución social, con un régimen de servicios y precios regulados. Expropiación de aquellas empresas que incumplan.

- Desarrollo de un plan de inversión socioecológico, creador de empleo, centrado en infraestructuras para el desarrollo de una industria transitoria basada en renovables (centrales termosolares, fotovoltaica, eólica, maremotriz, biomasa, etc...), que programe un cambio de modelo productivo y que limite el uso de las energías fósiles a la construcción de estas infraestructuras para una transición ecológica hacia un modelo productivo basado en renovables y decrecentista en el uso de materias primas y energías, para un proyecto de 30 años.
- Sostenibilidad medioambiental. Primacía del transporte público y colectivo, electrificación del sistema energético, reforestación, garantizar la soberanía alimentaria (regulando la distribución comercial final para evitar el abuso al productor directo, impidiendo los oligopolios y los privilegios que disfrutaban los terratenientes) y el desarrollo de cultivos de cereales y ganadería extensiva que sustituyan a la ganadería industrial intensiva y proteja el mundo rural.

Por una democracia laboral y por la protección e igualdad social

- Reforma del sistema de relaciones laborales, para democratizar el mundo del trabajo, dando primacía al mundo sindical en la elaboración de la regulación laboral sobre las patronales, promoviendo la participación de trabajadores, desarrollo de cláusulas garantistas de la estabilidad en el empleo, y protección ante el despido y el abuso de los empleadores y superiores (autorización laboral justificada, indemnización de 60 días por año trabajado al finalizar contrato temporal y 45 al indefinido), que generalicen el empleo con derechos, en la que la función productiva de los trabajadores se decida siguiendo criterios democráticos, méritos y de capacitación profesional.
- Reducción del tiempo de trabajo (máximo de 35 horas sin reducción salarial o semana de cuatro días) y reparto del empleo sin reducción salarial, elevando los salarios más bajos (Salario Mínimo Interprofesional a 1000 euros en una legislatura) y topando los más altos. Anticipación de la edad de jubilación a los 65 años y retiro progresivo a partir de los 60 con fórmulas de contrato de relevo y transferencia de experiencias. Derecho subjetivo del o la trabajadora para escoger entre empleo a tiempo completo o parcial. El empleo a tiempo parcial en situaciones de crianza, atención a personas dependientes o personas enfermas tendrá reconocido cotizaciones sociales equivalentes al empleo a tiempo completo y serán los últimos casos en sufrir despido. Renta básica.
- Garantizar la objetividad en los procesos de selección de personal. Promoveremos un organismo de empleo encargado no sólo de facilitar la intermediación laboral efectiva, sino la preselección de personal en las empresas con el objeto de limitar el poder del empresariado y evitar procesos de selección discriminatorio, clientelista o de favor personal que no atiendan a criterios de capacitación y méritos. Priorización de mayores proporciones (comenzando

con un mínimo del 25%) de presencia de mujeres en todas las ocupaciones y responsabilidades donde estén infrarrepresentadas, respetando la inclusión de colectivos de diversidad funcional (un 2% mínimo) desarrollando el empleo con apoyo.

- Regulación igualitaria obligatoria de los permisos por nacimiento o adopción de hijos e hijas.
- Refuerzo de las actividades de cuidados, derechos sociales y servicios públicos: educación, sanidad, pensiones públicas, y sectores de cuidados a la infancia, personas con diversidad funcional y personas mayores, mediante una mayor financiación a partir de un régimen fiscal progresivo, más centrado en rentas altas, del capital y del patrimonio, y la progresividad del sistema de cuotas a la seguridad social y la retirada de topes en las cuotas de los salarios más altos, y la mayoría de bonificaciones
- Además de la defensa de una sanidad pública, universal y de calidad, hemos de fijar las bases sobre una atención sanitaria de carácter integral y continuado. El debate político deberá centrarse en los matices y en los aspectos más concretos pero desde Podemos debemos de apoyar sin ningún tipo de titubeo una atención centrada en el paciente como protagonista real del sistema sanitario (al igual que debería de serlo en las instituciones) girando alrededor de la persona usuaria el resto de profesionales (equipo multidisciplinar) potenciando una atención pues más centrada en la persona, más desde lo humano, lo psicológico y menos en lo farmacológico. La disminución de la atención sanitaria centrada en el modelo médico es un reto que lleva consigo una lucha prolongada, pero se trata de una apuesta de las personas contra las grandes industrias farmacéuticas: espacios mercantilistas de la salud.
- Ampliación del sistema de pensiones hasta niveles dignos y suficientes, así como ampliar los mecanismos e infraestructuras de apoyo al cuidado colectivo que ahora recae casi exclusivamente sobre las familias (y específicamente sobre las mujeres). Blindar constitucionalmente el sistema de pensiones. Las tareas de crianza son una responsabilidad colectiva y requieren del necesario desarrollo presupuestario, así como de la creación de las infraestructuras comunes que sean necesarias.
- Plan de primera vivienda, que garantice el usufructo de la primera vivienda residencial cuanto menos bajo alquiler a un precio social no superior al 30% de los ingresos Gravamen especial sobre las viviendas en desuso, de adición al IBI –actualización del catastro-, y creación de parque de vivienda en alquiler social a partir de las viviendas del SAREB.

Un plan alternativo supranacional y un Plan B

La economía española, como toda la de la periferia europea, está severamente condicionada por el marco macroeconómico impuesto por la Unión Europea y el triple pilar del Sistema Euro en el marco de la moneda única; una política fiscal y de gasto restrictivas (Pacto de Estabilidad y Crecimiento y sucesores); una ausencia de presupuestos europeos redistributivos ni suficientes; y un Banco Central Europeo obsesivo con la defensa del interés del sistema financiero privado. De tal modo que los márgenes dependen fundamentalmente de la política que se desarrolle en relación al

entorno de la Unión Europea, sus tratados y políticas. Dicho de otra manera, la principal lección es la que ha venido a darse en Grecia, una experiencia que debemos enfrentar de una manera bien distinta a la hasta ahora aplicada.

Nosotros defendemos con nitidez una política de desobediencia de los Tratados Europeos en sus aspectos austeritarios, oponiéndonos a la política de la Troika y el Eurogrupo, comenzando con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y sus derivados (Six Pack y Two Pack) y la posible formación de un Fondo Monetario Europeo a partir del Mecanismo Europeo de Estabilidad, con un propósito claro de construir un esquema de desarrollo político internacionalista (plan de inversión supranacional, auditoría y conferencia sobre deuda, mayor capacidad fiscal progresiva, redistribución y solidaridad, comenzando en los países de la periferia europea) contra las políticas de ajuste neoliberal. Asimismo, se habrán de afrontar diferentes medidas, en distintos momentos, para hacer posible una alternativa política de reformas ecosocialistas, marco para un camino de emancipación, internacionalismo solidario y autoorganización popular y democrática.

Medidas de desobediencia y de fortalecimiento de la soberanía popular:

- No acatar los límites al déficit público, ni los proyectos de control de la UE de las reformas fiscales y negociación salarial establecidos en el Informe de los Cinco Presidentes.
- Mientras se gana capacidad fiscal y progresividad, habrá de emprenderse una política de inversión socioecológica en el marco de una política de transición que puede conllevar acumulación de déficits fiscales coyunturales. Esa política de inversión encierra la clave de bóveda para responder a la crisis, que solo podrá ser democrática y social, si se realiza desde el ámbito público, es redistributiva y atiende a criterios de cambio de modelo productivo y de creación de empleo.

Medidas preventivas:

Ante las posibles medidas adversas de la UE, habría que preparar un plan de respuesta, del siguiente perfil:

- Moratoria de la deuda pública, auditoría de la deuda pública. Posible medidas de impago selectivo siguiendo las conclusiones de la auditoría, en consulta democrática. Esta medida resulta imprescindible para contar con recursos para impulsar una política de inversión pública en los términos necesarios.
- Establecimiento de un control de movimiento de capitales transitorio, con varios objetivos: combatir la evasión fiscal y el lavado de capitales, evitar la fuga de capitales, y establecer tasas financieras internacionales, a ser posible con tantos países como fuera posible, para operaciones de corto plazo, así como prohibición y sanción para las operaciones ligadas a

tramas conducentes a operar con paraísos fiscales.

- Se preparará un organismo de autoridad monetaria para garantizar técnicamente, si es preciso, la circulación económica interior. Este organismo sería transitorio, en tanto que el propósito es formar parte de un área económica supranacional, de tal modo que la moneda interior se relacionaría en relación al Euro o, en su caso, si hay condiciones de inaugurar un nuevo espacio económico internacional, a una cesta de monedas de países con los que se mantuviese relaciones para una posible integración de economías comprometidas con un modelo de desarrollo solidario. Se trataría, así, de contribuir a la construcción de otra Europa o, sin corsés geográficos, otra área supranacional solidaria, sea con países hasta ahora pertenecientes a la UE y/o con otros. Ese área, en suma, habría de comenzar con acuerdos en materia de comercio igualitario, apoyo financiero mutuo y posibles avances en inversiones públicas conjuntas o, cuando se den las condiciones de convergencia reales, la creación de un aparato público compartido y, si se decide así, una nueva moneda común.

Por supuesto, estas líneas programáticas tienen que ir acompañadas de acción política y de la participación ciudadana, colaborando con todos espacios posibles.



POR
UN

PODEMOS

EN MOVIMIENTO